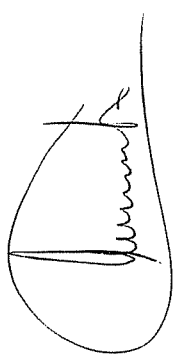


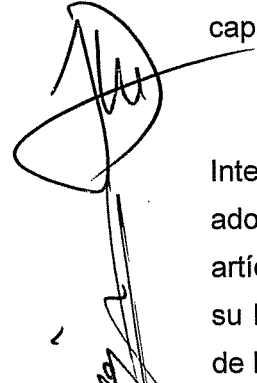
**CONVENIO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EL  
GOBIERNO DE NAVARRA Y LA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y  
CONCEJOS SOBRE LA DETECCIÓN DE SUPUESTOS DE VULNERABILIDAD  
CON OCASIÓN DEL LANZAMIENTO DE VIVIENDA FAMILIAR Y MEDIDAS DE  
CARÁCTER SOCIAL**

En Pamplona, a 11 de octubre de 2013


**REUNIDOS**



**D. Miguel Carmona Ruano y D. Claro José Fernández-Carnicero González,**  
**Vocales** en representación del Consejo General del Poder Judicial, expresamente  
facultados para el presente acto por Acuerdo del Presidente del Consejo General del  
Poder Judicial de 26 de septiembre de 2013, a quienes se les reconoce la plena  
capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio.



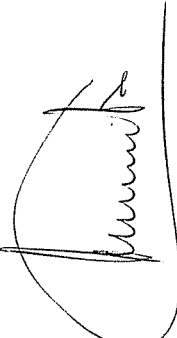
**D. Francisco Javier Morrás Iturmendi,** Consejero de Presidencia, Justicia e  
Interior del Gobierno de Navarra, en representación del mismo según Acuerdo  
adoptado el 9 de octubre de 2013, que actúa de conformidad con lo dispuesto en los  
artículos 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de  
su Presidente, y 90 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración  
de la Comunidad Foral de Navarra.



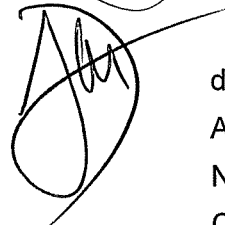
**D. Mariano Herrero Ibáñez,** presidente de la Federación Navarra de  
Municipios y Concejos, en su nombre y representación, de acuerdo con el artículo 45  
de sus estatutos.

Las partes, en la representación que respectivamente ostentan, han decidido suscribir el Convenio sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento o desahucio de vivienda en la que el deudor o el inquilino tengan su residencia familiar habitual, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social, en los términos que seguidamente

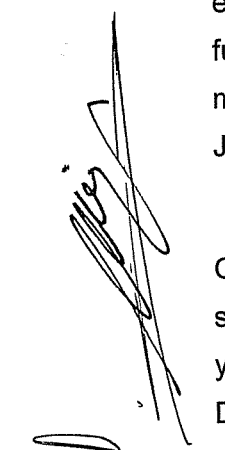
## EXPONEN



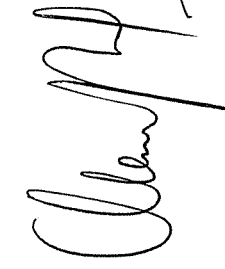
**Primero.-** Que el Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 104 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, es el órgano de gobierno del poder judicial, ejerce sus competencias en todo el territorio nacional y su presidente ostenta la representación del poder judicial y del mismo Consejo.



**Segundo.-** Que el artículo 60.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en relación con la Administración de Justicia, establece que corresponde a la Comunidad Foral de Navarra ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconocen o atribuyen al Gobierno del Estado. En esta cláusula se encuentra el origen del traspaso a la Comunidad Foral de las funciones que desempeñaba la Administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

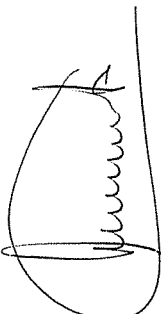


**Tercero.-** Que los Departamentos de Fomento y Políticas Sociales del Gobierno de Navarra tienen, a su vez, competencias en materia de vivienda y servicios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en los Decretos Forales 30/2012, de 27 de junio y 73/2012, de 25 de julio, por los que se establece la estructura orgánica de ambos Departamentos.

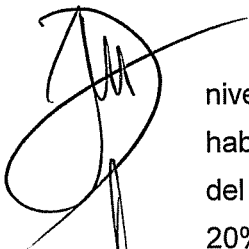


**Cuarto.-** Que la Federación Navarra de Municipios y Concejos es una asociación de entidades locales de Navarra, que goza de personalidad jurídica y capacidad de obrar y está legitimada para suscribir, en el ámbito propio de sus funciones, convenios con las Administraciones Públicas.


**Quinto.-** Que las administraciones públicas comparecientes pueden celebrar convenios de colaboración con otras entidades públicas y con personas jurídicas sujetas al Derecho Privado, al amparo de lo dispuesto en los artículos 4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 88 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y artículo 5 de los Estatutos de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.



**Sexto.-** Que la situación de crisis económica de los últimos años motiva que muchos ciudadanos se encuentran inmersos en procedimientos de ejecución que terminan en la subasta y pérdida de sus viviendas, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias. Esto ha provocado la adopción de sucesivas medidas de política económica que, no obstante, deben completarse con otras que permitan su extensión a los particulares con la finalidad de mitigar esta situación.



**Séptimo.-** En este sentido, el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, elevó el nivel de inembargabilidad en el caso de deudores que hubieran perdido su vivienda habitual hasta el 150% del Salario Mínimo Interprofesional, aumentó del 50% al 60% del valor de tasación el límite mínimo para la adjudicación del inmueble y redujo al 20% el depósito exigido para tomar parte en la subasta.



Por otra parte, el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios aprobó el denominado "Código de Buenas Prácticas", y el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, además de establecer la suspensión inmediata y por plazo de dos años de los desahucios de los

deudores que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad en los términos previstos en la propia norma.

**Octavo.-** Que la situación actual de crisis económica no afecta exclusivamente al mercado hipotecario, sino que extiende sus efectos al arrendamiento de vivienda. A pesar de las sucesivas reformas que han intentado flexibilizar el sector y garantizar la posición de ambas partes, arrendador y arrendatario, la disminución o pérdida de la capacidad económica aboca en muchos casos al desahucio por falta de pago de la renta.

El Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos coinciden en el diagnóstico expuesto y en la necesidad de abordar conjunta y coordinadamente medidas que den respuesta a las situaciones de vulnerabilidad que pudieran detectarse en el curso de los procedimientos judiciales o por la Administración de Justicia en el desempeño de su labor, por lo que las partes acuerdan firmar el presente convenio de colaboración con base en las siguientes:

## CLÁUSULAS

### Primera.- Objeto del Convenio.

El presente Convenio de colaboración tiene por objeto establecer un protocolo de actuación que desarrolle la forma a través de la cual cuando, con motivo de un desahucio derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un juicio por falta de pago de la renta, se observe una situación de especial vulnerabilidad, sea por existir elementos que permitan pensar en la aplicación del Código de Buenas Prácticas Bancarias o del Real Decreto-Ley 27/2012, sea por apreciar la posible presencia de cláusulas contractuales abusivas, sea por razones de edad, imposibilidad de valerse por uno mismo o cualesquiera otras que, a juicio de la Autoridad Judicial, determinen la conveniencia o necesidad de intervención de los servicios sociales del Gobierno de Navarra, o de los de las entidades locales que se adhieran al presente Convenio, se

comunique por el medio más rápido posible al organismo competente para que, previa realización de las comprobaciones que se consideren, la Administración Foral o Local puedan adoptar la decisión oportuna y en caso de las ejecuciones hipotecarias incluirlas, si cumplen los requisitos, en los programas de realojo, asistencia o apoyo a los afectados por ejecuciones hipotecarias gestionados por las citadas Administraciones o , en su caso, recabar la intervención de los servicios sociales, garantizando la atención debida.

En definitiva, se trata de que las personas en situación de especial riesgo de exclusión y vulnerabilidad se encuentren con una respuesta de las Administraciones sensible y adecuada, en el marco de la normativa vigente.

### **Segunda.- Protocolo de Actuación.**

A los efectos del presente Convenio, es preciso distinguir entre las dos situaciones que pueden provocar el desahucio:

#### 1.- Procedimientos de ejecución hipotecaria que versen sobre vivienda habitual.

▪ Cuando el Juez que conozca de un asunto observe que, al efectuarse el requerimiento de pago bien antes de interponerse la demanda bien al despacharse ejecución, no se ha informado al deudor hipotecario de manera clara y veraz del contenido y posibilidades previstas en el Código de Buenas Prácticas Bancarias aprobado por Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, y en el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, adoptará las medidas oportunas para que se remita al deudor una nota comprensiva de los elementos esenciales introducidos por tales normas o cualesquiera otras que pudieran aprobarse en el futuro con relación a la materia de que se trata, a fin de que el destinatario pueda, en su caso, hacer las alegaciones que considere pertinentes, sin suspender el curso del procedimiento.

▪ Cuando durante la sustanciación de un procedimiento de ejecución hipotecaria se detecte la existencia de una eventual situación de vulnerabilidad que pudiera incardinarse en el ámbito del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, o del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de

noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, o, en general, una situación de desvalimiento o de riesgo de exclusión social, se dará traslado al Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra o a los servicios sociales de la correspondiente entidad local adherida a este Convenio para que, con estricto respeto a la protección de datos de carácter personal, la Administración pueda realizar las gestiones necesarias para analizar la problemática y, en caso de que sea procedente, adoptar las medidas encaminadas para asegurar la actuación de los servicios sociales.

▪ Cuando en el desarrollo de un lanzamiento se constate una eventual situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará inmediata cuenta al Juez que conozca del asunto y que resolverá si procede decretar la suspensión por el plazo imprescindible y nunca superior a diez días para que los servicios sociales, advertidos al efecto, puedan hacer una valoración provisional de las circunstancias concurrentes y acometer la actuación que proceda.

▪ En todo caso, verificada la comunicación y examinada la situación, la Administración correspondiente adoptará la decisión que proceda y que podrá consistir en formular una propuesta de intervención, o declinar la misma por considerar que las circunstancias no permiten concluir que se trate de una situación que entre en el marco o esfera de actuación de los servicios sociales. Una u otra decisión se comunicará al órgano judicial, el cual, si la propuesta fuere positiva, procurará adecuar la tramitación para garantizar la tutela y efectividad de los intereses legítimos de ambas partes, siempre con estricto cumplimiento de las leyes procesales.

## 2.- Procedimientos de desahucio de vivienda habitual por falta de pago de la renta.

▪ Con la cédula de citación a juicio y la copia de la demanda se acompañará un folleto informativo de los servicios y programas de asistencia social, sean de la Administración Foral o de la Administración local.

▪ Cuando durante la tramitación de un procedimiento de desahucio por falta de pago de la renta se detecte una situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará traslado al Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra o a los servicios sociales de la correspondiente entidad local adherida para que, con estricto respeto a la protección de datos de carácter personal, la Administración pueda realizar las gestiones necesarias para analizar la problemática y, en caso de que sea procedente, adoptar las medidas encaminadas para asegurar la actuación de los servicios sociales.

Quando en el desarrollo de un lanzamiento por falta de pago de la renta se constate una eventual situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, se dará inmediata cuenta al Juez que conozca del asunto y que resolverá si procede que se de inmediata cuenta a los servicios sociales para que puedan hacer una valoración provisional de las circunstancias concurrentes y acometer la actuación que proceda en el ámbito de los servicios sociales.

### **Tercera.- Compromisos del Consejo General del Poder Judicial.**

- Elaborará y pondrá a disposición de los Juzgados los folletos informativos y formularios normalizados, en papel y en soporte electrónico, así como la información existente sobre la organización, funcionamiento y competencias de los servicios sociales.
- Proporcionará al Gobierno de Navarra los formularios e impresos normalizados para su inserción en las aplicaciones informáticas de gestión procesal.
- Elaborará un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones realizadas al amparo del Convenio.

### **Cuarta.- Compromisos del Gobierno de Navarra.**

- Facilitará, a través del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, al Consejo General del Poder Judicial y a los Juzgados radicados en Navarra toda la información disponible sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de asistencia

social, con especial atención a los programas específicos de realojo y disposición de viviendas.

- Facilitará, a través del Departamento citado, la identificación del personal responsable a los efectos de las comunicaciones previstas en el presente Convenio.

- Se compromete a dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente a las solicitudes remitidas por los Juzgados y a comunicar la resolución que ponga fin al expediente.

#### **Quinta.- Compromisos de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.**

- Promoverá entre sus asociados el conocimiento de este Convenio, buscando su colaboración para la ejecución de los compromisos en él recogidos

- Trasladará a los Juzgados de Navarra y al Departamento de Presidencia, Justicia e interior copia de los acuerdos de adhesión que reciba a efectos de que pueda articularse la colaboración convenida.

- Facilitará al Consejo General del Poder Judicial y a los Juzgados radicados en Navarra toda la información disponible sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de asistencia social.

- Facilitará la identificación del personal responsable de sus asociados, a los efectos de las comunicaciones previstas en el presente Convenio.

- Procurará que sus asociados den una respuesta inmediata y una tramitación urgente a las solicitudes remitidas por los Juzgados y comuniquen la resolución que ponga fin al expediente.

#### **Sexta.- Comunicaciones entre las partes.**

Las comunicaciones entre la Administración de Justicia, el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, Federación Navarra de Municipios y Concejos, y el



correspondiente ente local se efectuarán preferentemente por conducto telefónico y electrónico.

#### **Séptima.- Confidencialidad de la información y de los resultados.**

Los firmantes se comprometen a garantizar la total confidencialidad de los datos personales y familiares a los que tengan acceso como consecuencia de las actividades realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Igualmente se comprometen a observar lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que se refiere al acceso limitado a los propios interesados en relación con los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas.

#### **Octava.- Gastos de ejecución del Convenio.**

El presente Convenio no comporta gasto alguno para las partes firmantes, al centrarse en la elaboración de fórmulas de coordinación entre la Administración de Justicia y la Administración Foral y Local, insertándose las obligaciones de las partes en el desarrollo ordinario de las competencias propias. Cada una de las partes firmantes del presente Convenio asumirá el coste de las actuaciones que deba realizar de conformidad con el clausulado del mismo y con arreglo a sus respectivas normas de gestión económica.

#### **Novena.- Comisión de seguimiento del convenio.**

Según lo previsto en los artículos 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 88 de la Ley Foral 15/2004, citada, se crea un órgano mixto de vigilancia y control de la ejecución y aplicación de este convenio y de resolución de controversias administrativas. Esta Comisión estará integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes del presente convenio.

La Comisión se reunirá de forma ordinaria cada tres meses con el objeto de garantizar la calidad del servicio, corregir disfuncionalidades, analizar la experiencia y formular propuestas; y con carácter extraordinario cuando fuera necesario a petición de cualquiera de las partes.

Actuará como secretario, uno de los representantes designados por la Administración Foral de Navarra, pudiendo ser asistida en las labores administrativas por personal del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.

#### **Décima.- Vigencia del convenio.**

La vigencia del presente Convenio es indefinida, si bien cualquiera de las partes podrá denunciarlo poniéndolo en conocimiento de las otras, al menos con tres meses de antelación a la fecha en que se deseara dejarlo sin efecto.

#### **Decimoprimera.- Naturaleza jurídica.**

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se registrá por las cláusulas establecidas en el mismo, y, en su defecto, por lo regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

#### **Decimosegunda.- Resolución del Convenio.**

Será causa de resolución del presente Convenio el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas y/o cláusulas establecidas en él, así como el incumplimiento de la normativa vigente en la materia, lo que facultará a las otras partes para la resolución del mismo, quedando automáticamente anulados todos los derechos derivados, pero no así las obligaciones inherentes.

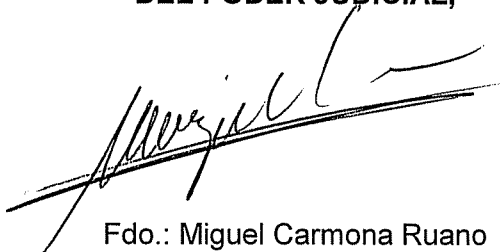
#### **Decimotercera.- Cuestiones litigiosas.**

Corresponde a la Comisión de Seguimiento, la resolución de las cuestiones litigiosas que puedan plantear cualquiera de las partes firmantes del Convenio sobre la interpretación, modificación, cumplimiento, resolución o efectos del presente convenio,

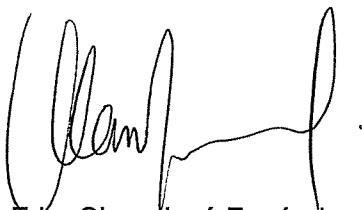
con carácter previo a su sometimiento al orden jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, y para la debida constancia, se firma el presente convenio de colaboración en el lugar y fecha arriba indicados.

**POR EL CONSEJO GENERAL  
DEL PODER JUDICIAL,**

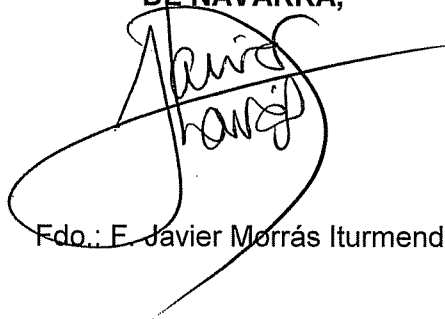


Fdo.: Miguel Carmona Ruano



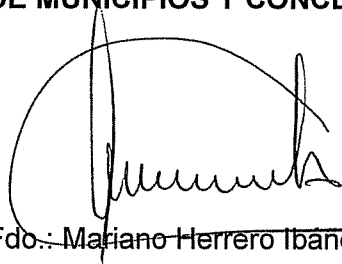
Fdo. Claro José Fenández- Carnicero  
González

**POR EL GOBIERNO  
DE NAVARRA,**



Fdo.: E. Javier Morrás Iturmendi

**POR LA FEDERACIÓN NAVARRA  
DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS,**



Fdo.: Mariano Herrero Ibáñez